

Capítulo **4**

El COVID 19 y los entrelazamientos de la precariedad y la violencia en Colombia

*Oliver Augusto Tabares Osorio
Universidad de Medellín*

<https://doi.org/10.61728/AE20257552>



Resumen

Despertar de un mal sueño. De esos que quieres olvidar pero que su presencia está ahí rondando tú cabeza, tú casa, tú barrio, tú ciudad como un Horla. O quizás, es el reclamo por el afán de un olvido intencionado, para salir del letargo que nos produjo el terror de algo impensado como el COVID 19 en el momento histórico donde más seguros nos sentíamos como humanidad.

Este escrito es sobre Colombia, con todos los olvidos y olvidados de una memoria biológica y documental frágil e intencionada en invisibilizar a millones de personas que somos, los nadie. En él se hace una reflexión sobre Colombia, que, como un grito desesperado, trata de salir de una trampa llamada violencia, porque no es posible avizorar un futuro promisorio entretanto el narcotráfico y la corrupción política, sigan creando espacios relacionales con la cultura. Este escrito es sobre Colombia, para tratar de contar una mirada de lo que nos pasó.

Introducción

La pandemia por COVID-19 representó un acontecimiento crítico que, más allá de su dimensión sanitaria, reveló de manera contundente las profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que atraviesan la estructura histórica de Colombia. Este capítulo analiza los efectos interrelacionados de la precariedad y la violencia en un contexto marcado por la emergencia global, donde las medidas gubernamentales, las dinámicas del mercado laboral, las condiciones de subsistencia y los conflictos sociales interactuaron de forma compleja, generando escenarios de alta vulnerabilidad para amplios sectores de la población.

La crisis derivada del SARS-CoV-2 no solo evidenció el debilitamiento de los sistemas de protección social, sino que profundizó fenómenos preexistentes como la pobreza estructural, el desempleo, la exclusión educativa, la migración forzada y la violencia en sus múltiples manifes-

taciones: institucional, criminal, económica y simbólica. Estos factores confluieron en la gestación de un malestar social acumulado que, sumado a la percepción de ineficiencia estatal y corrupción sistemática, desencadenó procesos de protesta masiva como el denominado Estallido Social de 2021, considerado un punto de inflexión en la historia reciente del país.

Desde un enfoque interdisciplinario, el capítulo aborda los vínculos entre precariedad, violencia y movilización social, examinando cómo las políticas públicas, las respuestas institucionales y las dinámicas comunitarias configuraron un entramado de tensiones que transformaron las relaciones entre Estado, sociedad y mercado. Asimismo, propone un análisis sobre la construcción de subjetividades colectivas, el papel de los jóvenes y los sectores históricamente marginados en las manifestaciones, y la manera en que estas resistencias resignifican la participación ciudadana en contextos de crisis.

El propósito central es ofrecer una reflexión crítica sobre los desafíos contemporáneos de Colombia, entendiendo que la pandemia actuó como catalizador de problemáticas históricas y como detonante de nuevos escenarios de conflictividad social. Lejos de constituir una narrativa exclusivamente retrospectiva, este capítulo invita a pensar la interdependencia entre las múltiples formas de violencia, la desigualdad estructural y la necesidad de repensar los modelos de gobernanza, inclusión y justicia social para la construcción de un futuro más equitativo y sostenible.

La biología, la economía y la historia

Para la mayoría de las personas en Colombia, los impactos negativos de la pandemia por SARS –CoV-2, se sintieron después del primer trimestre del año 2020 de una forma inimaginada, sostenida, contundente y sobre todo, con un alto grado de incertidumbre vital en el tiempo. Es decir, lo que sobrevino con la pandemia del COVID 19 para los colombianos fue el horror que nos desnudó como una sociedad con grandes problemas de educación básica en respeto y profundas e irreconciliables divisiones socioculturales. De ahí que, los efectos no solamente fueron biológicos. Había que considerar los impactos sociales y colaterales al virus, porque fueron devastadores por las medidas del confinamiento a las que nos

sometimos, en un país como Colombia que está sumido desde hace más de 70 años en una violencia cotidiana y sin sentido.

El primer fenómeno que se evidenció fue la ralentización de la estructura macroeconómica industrial y agrícola del país. Asunto extremadamente preocupante, ya que la visión gubernamental de una economía nacional se tornaba debilitada e incipiente – casi improvisada en términos de historia y política económica –. Es decir: el modelo “novedoso” de política económica para Colombia en el de gobierno del presidente Iván Duque Márquez, estaba estructurado en tres grandes ejes. Primero, en el desarrollo de un sistema de emprendedores que generaran ofertas crecientes de bienes y servicios en sentido de artes y patrimonio. Segundo, en todo lo concerniente a la potenciación y surgimiento de nuevas industrias culturales. Por último, en un sistema creativo funcional para la proyección y puesta en marcha de nuevas tecnologías. Dicha política fue llamada “Economía Naranja”. Modelo que desde su implementación fue recibido con críticas serias -incluso antes de la pandemia- por parte de académicos, especialistas y sectores de la economía tradicionales en su concepción e implementación como política económica para Colombia.

Así pues, con una economía nacional fuertemente criticada y muchas veces demostrada como excluyente en lógica de oportunidades para las mayorías de los sectores de la población y personas en específico que no tuvieron la oportunidad de una estabilidad salarial o laboral, ni siquiera antes de la tragedia, el gobierno se empeñó en implementar la Economía Naranja como norte de producción. Sumado a ello, surgieron las disposiciones gubernamentales del confinamiento para prevenir de forma temprana los contagios por COVID 19 y allí se potenció la tragedia. Dichas medidas aterrizaron rápidamente y de forma escalar a los menos favorecidos, los pobres y la clase media. Trayendo consigo mayor hambre de la que, en la historia jamás habíamos conocido. Dicho de paso, estos segmentos de la población obedecen a un modelo de subsistencia que logra sus provisiones día a día, como máximo proyectados a semanas.

En las ciudades principales de Colombia la desesperación de la gente por la miseria y falta de provisiones era titular en los noticieros y periódicos, tema de conversaciones entre familiares y en los vecindarios y por supuesto, preocupación en las administraciones locales. Pues las personas

“violaban” las medidas del confinamiento adoptadas por el gobierno para salir a la calle a mendigar por cualquier tipo de comida, era muy común encontrar a familias enteras habitantes de los barrios marginales –con sus niños y ancianos- apostados al borde de las autopistas esperando que se les compartiera algo de alimento con qué saciar el hambre. Sin duda alguna, la situación era peor en las zonas rurales del país.

Aunque era notable que el gobierno generaba subsidios a familias vulnerables y a las nóminas de las empresas, muchas comunidades con mejores condiciones económicas, empresas privadas, gremios e instituciones educativas se organizaban bajo el principio de solidaridad y recogían recursos monetarios o alimenticios para librar campañas de apoyo barrial en pro de mitigar el horror. Los esfuerzos no eran suficientes, porque el drama del hambre y la pobreza ya era una constante histórica en Colombia y las medidas del confinamiento por la pandemia solo exacerbaban dicha condición. Pero había familias enteras que vivían dramas peores y eran las personas migrantes de países vecinos, que no solo tenían que conseguir alimentos para sus niños y ancianos, sino que tenían que lograr recursos para los alojamientos en lugares con características de hacinamiento. Dejando entrever el drama de la migración. Para ilustrar mejor la tragedia que se avecinaba, es necesario comentar un comportamiento social que generó mucho sufrimiento, fue el relacionado con las formas de tratamiento que se les daba a los profesionales de la salud – médicos y enfermeras –. Quizás sea el campo profesional con mayores cargas de odio y señalamiento social en la pandemia, que pudieran equipararse al que se ha sentido por los pobres y desfavorecidos en sentido histórico o la hostilidad hacia la policía nacional en el marco del Estallido Social. Llegando hasta el punto de que los médicos recibían amenazas de muerte para ellos y sus familias en sus propios hogares, desde peticiones para desalojar sus viviendas, hasta intimidaciones y agresiones físicas en hospitales y centros de salud.

Algunos otros “sujetos del común” buscando alternativas de supervivencia y valiéndose de virtudes artísticas intentaron compartir actos culturales callejeros – cuadra a cuadra – dando nacimiento a nuevos oficios como el de cantar óperas o hacer conciertos improvisados de música clásica, popular y rock. Todo por comida. Otras personas más

limitadas en sentido artístico sólo usaban la voz en la súplica por cualquier ayuda. Recorriendo a pie kilómetros enteros para llegar a los barrios de estratificación socio-económica alta o parándose en semáforos y salidas de supermercados esperando que alguien les colaborara con cualquier cosa, incluso objetos que no eran alimentos como ropa o utensilios, los cuales servirían para hacer trueques por suministros.

Otra situación presentada en pandemia fue el aumento desproporcionado de fenómeno de entretenimiento de personas que son instrumentalizadas para beneficio de terceros – por las mafias- o individuos en posibles situaciones de abusos de toda índole, lo que a todas luces es un delito. Por su condición, no todos los sitios en cuestión estaban registrados ante los ministerios que controlan la actividad económica; algunos tampoco contaban con las condiciones de salubridad idóneas para prestar el servicio o no cumplían con las garantías de derechos laborales de los empleados; esta es la naturaleza de la potente industria virtual del entretenimiento con contenido sexual explícito para adultos. Lo cierto es que es una industria legal en Colombia, donde y con cierta aversión, muchos jóvenes encontraron una fuente de ingresos, inclusive superiores a la media nacional. Conversación que no ha sido abordada como debate público en el país.

Otros tantos sujetos en actitud incluso más desafiantes todavía ante la autoridad y poniendo en riesgo su salud y la de los demás desde varias perspectivas – sobre todo desde lo que señalaban los discursos del gobierno – sacaban a la calle sus comercios informales de dulces o golosinas, helados o refrescos – eran los vendedores ambulantes o trabajadores informales – para intentar obtener algún recurso económico. Ejercicio que casi siempre terminaba con los resultados imaginados en el momento: hambre, por el simple hecho de no haber nadie en la calle. Estos vendedores esperaban pacientemente las convocatorias a las marchas y concentraciones de la ciudad para intentar vender algo, al menos al principio de las movilizaciones porque después de cierta hora de la tarde todo terminaba en caos, poniendo en riesgo sus vidas. Un asunto de extrema importancia y con muchos registros vivenciales o anecdóticos, exalta una labor colaborativa absolutamente desinteresada por parte de estos vendedores ambulantes que ayudaron a los jóvenes que eran golpeados en el paro, incluso ofrecían sus productos de forma

gratuita para calmar el horror del hambre y la sed en los jóvenes de La Primera Línea. Reconocimiento social que está pendiente en los pasivos sociales de la ciudad.

Muchos otros sufrieron lo inimaginable porque ni siquiera tenían un hogar diferente a las calles del centro de la ciudad y quedaron a merced de su suerte. No solo por la pandemia, sino también porque siempre han sido invisibilizados en esta sociedad particularmente clasista, el asunto va más allá del hambre y también es un pasivo enorme que debemos como sociedad. Son seres humanos de quien no comprendemos los esfuerzos que tuvieron que hacer para alimentarse, o para asumir la protección de su vida ante el virus y mucho menos, de los peligros que tuvieron que sortear frente la delincuencia callejera que aún se sostenía y tenía capacidad de acción violenta en el confinamiento.

Como el tema del hambre era de gran magnitud, pues eran sectores y barrios enteros de las ciudades colombianas los que reclamaban ayudas. Las familias con mayores precariedades comenzaron a identificarse de una forma particular y a pedir socorro en un acto humillante por la impotencia, con algún trapo o distintivo de color rojo el cual colgaban en un lugar visible de sus hogares, para que así fueran distinguidos por las ayudas que se llevaban esporádicamente.

Las políticas para el manejo de la pandemia y por la cual el gobierno se ufana al decir que Colombia era unos de los primeros países en Latinoamérica que adoptaba medidas preventivas tempranas ante el COVID, fueron absolutamente ineficientes y contraproducentes por el nivel de endeudamiento público al que llegaba. Además, siempre estuvieron en sospecha, porque si se ponía a prueba el modelo digital de comprobación de la identidad de los beneficiarios en el programa “Ingreso Solidario”, que era el programa de subsidios a los necesitados, era común encontrar situaciones que rayaban en el absurdo, como personas ya muertas o con doble identidad (El tiempo, 2021). Estos indicios de fraude con los recursos públicos alentaban a la gente en su descontento.

Pero la historia no termina ahí, en las clases sociales desfavorecidas. A la par de los dramas de la gente pobre, se iban abriendo fisuras en las otras clases sociales, como en la clase media y algunos hogares de la alta, ya que los efectos de la pandemia lograron alcances dramáticos

e insospechados en esos rangos socioeconómicos. La información no era clara, pues al parecer sobrecaía una vergüenza oculta al ver cómo había una disminución drástica de ingresos económicos que ponían en riesgo el estatus social de cientos de personas y familias. Dicho de otra manera, la clase media de Colombia iba en dirección contraria a la que tradicionalmente se posaban sus perspectivas aspiracionales y que con el paso de los días llegaban a la condición de pobreza.

En este punto hay una situación engañosa del gobierno que vale la pena develar y que solo tenía efectos en maquillar las cifras macroeconómicas, los índices de desarrollo del país o para el recaudo de mayores impuestos en una reforma tributaria. El tema es que la clase media se sitúa para el gobierno, en un rango extremadamente amplio y diferencial entre sí, donde el ingreso per cápita que oscile entre los 653.781 pesos y los 3´520.000, sería considerado como clase media (El Tiempo, 2021). Es decir, la clase media es casi todo el segmento productivo de Colombia, incluyendo los que ganen el salario mínimo y eso es falso.

El estallido social del 2021 en Colombia

Las causas por las cuales hubo en Colombia lo que históricamente se conocería como El Estallido Social, podrían considerarse como el culmen de las deudas generacionales y los pasivos sociales problemáticos de la política, sostenidos por dos siglos de república. Situaciones que pertenecen al campo de los sistemas de la complejidad creciente, porque son asuntos que tienen que ver con el fenómeno de la vida, ya que, en última instancia, lo que estaba en función del “riesgo nacional” tal como lo nombraban los voceros del gobierno para ese momento, no solo era la integridad física, emocional y de los bienes patrimoniales de la ciudadanía, sino que a su vez, eran muchas las personas con carácter civil que se jugaban y perdían la vida (Indepaz, 2021) misma, en una cotidianidad del terror. Es decir, no solo había complejidad creciente ante el riesgo inminente de contagiarse con el virus del COVID 19 al tomar las calles y parques de las ciudades, sino también, ante la enorme posibilidad de fenecer en un hecho trágico o ser una víctima catastrófica de los actos de represión Estatal y Paraestatal excesivamente violentos, representados

en un gobierno y un accionar agresivo de clases sociales privilegiadas. Ambos claramente indolentes (El Espectador, 2022).

Quienes sufrieron los embates de la represión legal e ilegal del gobierno y de muchos civiles armados pertenecientes a las clases sociales privilegiadas organizados como grupos urbanos paramilitares apoyados por agentes del Estado, que además establecieron un imaginario de marginalidad, fijación y persecución a los manifestantes del “Estallido Social”, a los que había que combatir con armamento de fuego letal, fueron en su mayoría los jóvenes, campesinos e indígenas anónimos que en el argot popular colombiano se les conoce como “Los Nadie”, que luego de organizarse en forma adaptativa (Velázquez, 2021) ante el terror de Estado y de clase, adquirieron connotación nacional en términos de legitimidad en las bases sociales menos favorecidas, al hacerse llamar La Primera Línea (El Tiempo, 2022).

La Primera Línea, no era más que un grupo numeroso de muchachos dotados de protección improvisada con escudos hechos de madera, cartón o plástico, piedras, garrotes, bombas molotov y mucho ímpetu. Eran jóvenes que hacían resistencia directa a las incursiones del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la policía –ESMAD- con todo su aparataje técnico y táctico del Estado, lo que incluía desde escopetas calibre 12 con munición “no letal”, camiones blindados con lanza cohetes de gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y bombas aturdidoras conocido como “Venom”, hasta helicópteros con armamento no reconocido, más algunas armas de fuego letal que policías y civiles disparaban de un lado y otro, dejando entrever una permeación intencionada de grupos criminales como milicias y mafias de narcotráfico interesados en el mantenimiento del caos.

Mientras que, para el gobierno, lo mismo para los intereses de segmentos de clase y los medios de comunicación tradicionales, los miembros de La Primera Línea siempre fueron considerados como vándalos, para la gente del común, en su mayoría pobres, estos grupos de muchachos fueron reconocidos como grandes rebeldes sociales. Fue tal el efecto de masa abierta y de legitimidad que logró La Primera Línea, que luego se sumaron al paro nacional movimientos estudiantiles, gremios de taxistas y camioneros, centrales obreras, federaciones de maestros, asociaciones de

médicos y enfermeras, madres de familia, artistas, intelectuales, ancianos etc. Dicho de otra manera, los grados de impredecibilidad, inestabilidad, emergencias y turbulencias de los movimientos liderados por los jóvenes, campesinos e indígenas en Colombia ante los abusos del Estado y de clase, modificaron los cimientos de comprensión y participación ideológicos y políticos de un país que se hacía notar al menos, para la región y en sentido histórico, por cierta estabilidad democrática -tendiente a una derecha política dominante o hegemónica- Viraje evidente en las elecciones parlamentarias y presidenciales en el 2022, donde el partido de gobierno de ultraderecha que gobernaba desde hacía dos décadas en el país, perdió fuerza a tal punto de convertirse en una minoría parlamentaria, sin representación en la contienda presidencial.

Pero para comprender mejor lo anterior, es preciso nombrar algunos fenómenos contundentes y temerarios que se presentaron como antecedentes durante el Estallido Social y que sirvieron de reactivo para que eclosionara tal movimiento de masas con características muy semejantes a las de una revolución social. En este punto es necesaria la discrecionalidad en el nombrar tales asuntos por dos razones, la primera es la relevancia del fenómeno descrito para el fomento de un sentimiento de indignación generalizado en la masa abierta; el segundo, es por la cantidad de casos extremos que se pueden hallar en las narrativas de la pandemia y que sobrecargan las energías contenidas de la masa, que, además, se tornaron críticas bajo el fenómeno de acumulación de energía potencialmente desbordante.

El primero será, la sumatoria de casos conocidos de corrupción gubernamental y política (El Tiempo, 2017), -incluyendo a los partidos y movimientos en oposición al gobierno-. Para contextualizar, existe un episodio que socavó la confianza de la ciudadanía en el gobierno del presidente Iván Duque Márquez desde el 15 agosto de 2020, cuando se publican los pliegos primarios del proyecto “Centros Digitales”. Aunque el delito de corrupción solo se vino a saber públicamente hasta finales del 2020. Se conoce como el caso de Centros Poblados (Bohorquez, 2021) que era en términos generales, un contrato millonario para llevar internet a zonas apartadas del país y que tuvo como protagonista a la ministra de las TIC – Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, no porque haya sido

declarada culpable del desfalco, sino por su papel pasivo en el desarrollo del mismo escándalo. El caso termina develando adelantos millonarios por 70 mil millones de pesos a empresas reales, pero con poca experiencia en el campo de las telecomunicaciones que se conformaron con documentación falsa en las pólizas y respaldos financieros, solamente para ganar la adjudicación contractual, todo con la aprobación de los funcionarios públicos responsables de la verificación de requisitos de ley, dejando claro una especie de organización criminal corrupta al interior del ministerio de las TIC. Lo cierto es que, hasta el momento, no se han podido recuperar los recursos entregados y pocos son los condenados.

El segundo, es debido a la reforma tributaria o “ley de solidaridad sostenible”. Quizás esta iniciativa gubernamental sea uno de los puntos más controversiales y contundentes para el nacimiento del “Estallido Social” en Colombia, cuya gran pretensión era lograr los recursos para la financiación de los programas de apoyo social que se le otorgaban a las clases menos favorecidas y a fábricas del medio empresarial, en el marco de la pandemia del COVID 19. Esto generó gran indignación social precisamente en sectores comerciales y empresariales de la producción intermedia del país que ya venían golpeados por los efectos negativos en la economía producto de la misma pandemia y se rumoraba que se aumentarían o gravarían algunas cargas impositivas –IVA- a los productos de la “canasta familiar”, hecho que afectaba a todos los colombianos.

La gran pregunta que la gente se hacía y que no comprendía era ¿cómo era posible pensar en crear más impuestos, considerando todo lo que estaba pasando? Lo anterior confrontaba a la gente en el dilema que se le planteaba al gobierno y que vino calando en el descontento popular ante el aumento de los llamados al presidente y al ministro de hacienda Alberto Carrasquilla Barrera– personaje rebatido en la política por el caso de los bonos del agua (El Colombiano, 2018) - para que entraran en razón al considerar nuevas propuestas que no afectaran de forma directa a la gente del común, por ejemplo, recomendaciones a la sensatez y medida en los gastos operacionales del gobierno; por nombrar algunos: el caso de la renovación del parque automotor para la seguridad de congresistas y funcionarios de alto rango o la reducción de gastos en publicidad para mejorar o promocionar la imagen pública del gobierno o

la compra de elementos técnicos para mejorar la capacidad de actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAD de la policía nacional o la propuesta de reducir gastos en la rama del poder legislativo –salarios de congresistas y gastos operacionales asociados a su función, máxime cuando había teletrabajo o los encuentros eran virtuales-.

Las peticiones no fueron oídas por el presidente, ni su ministro y el reclamo generalizado fue por la ineptitud en el manejo de asuntos urgentes referentes a la inversión social del gobierno, la necesidad, la ceguera y desconexión de unas realidades político-sociales para entender y tramitar las demandas ciudadanas en materia de atención prioritaria de comunidades enteras. En abril del 2021 hubo un evento crucial donde la gente se sintió francamente burlada y fue la entrevista en la plataforma de la revista *Semana* que se le hizo al ministro Carrasquilla Barrera, donde demostró no conocer las “realidades de las mayorías de colombianos” al comentar de cierta forma ingenua y luego burlesca el valor de un producto básico de la canasta familiar como los huevos (STV Noticias, 2021). Lo anterior sirvió de estímulo a los miembros de la Primera Línea para resistir y fijarse como propósito tumbar dicha propuesta de reforma, lo que costaría muchas muertes de jóvenes, en su mayoría.

Lo tercero, tiene relación directa con los índices elevados de asuntos no resueltos por la justicia en casos graves de delitos asociados a la corrupción, al narcotráfico y a la organización para el crimen, que son archivados o precluidos por vencimientos de términos ante la ley o simplemente son casos tan patéticos que suenan inverosímiles. Existen numerosos ejemplos de esta característica, entre estos, el caso del zar anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Luis Gustavo Moreno Rivera – quien ocupó el cargo entre los años 2016-2017- funcionario que les exigía a políticos corruptos dinero a cambio de favores judiciales y luego estableció la conexión directa que se extendía hasta la Corte Suprema de Justicia –una de las instituciones estatales en la que la gente depositaba más su confianza- con el caso del Cártel de la Toga y sus protagonistas los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte Gómez, José Leónidas Bustos Martínez y Gustavo Enrique Malo Fernández, que junto con el Zar anticorrupción Moreno Rivera montaron una empresa criminal de alto nivel. Son dos grandes casos de corrupción absurda en

Colombia, que lograron gran indignación en las gentes (Transparencia por Colombia, 2020).

En cuarto lugar, están los emporios comercial e industrial de los grupos empresariales y de interés en su relación con el gobierno. En el periodo de gobierno del presidente Duque Márquez hubo claramente un lineamiento de política económica para la protección de grandes industrias y grandes comercios, pensados como factores dinamizadores del empleo y la economía en general. Cuando hubo el confinamiento, por consiguiente, el estancamiento de la economía, el presidente de los colombianos intentó sostener con el erario público y bajo la figura de préstamos públicos a empresas robustas como Avianca (Torrado, 2020) – una aerolínea privada, donde la hermana del mismo presidente ocupaba un alto cargo ejecutivo- Por suerte no sucedió. Lo cierto es que hubo enormes movimientos de capital logrados en la modalidad de deuda pública internacional y repartida bajo la premisa de subsidios empresariales sin conocerse más información al respecto y donde los bancos privados terminaron siendo tramitadores de gigantescos flujos de capital, por ende, ganadores directos en la figura de comisionistas por la bancarización nacional.

También en el marco del confinamiento, las grandes superficies o almacenes en cadena, eran quienes tenían los permisos para vender al público los víveres y suministros de supervivencia, dejando réditos sobresalientes en las finanzas. Dicho de forma clara y sin ambages, los emporios comerciales y bancarios de Colombia, fueron los grandes ganadores de la pandemia.

El quinto factor, se refiere a las tasas crecientes de impunidad para resolver crímenes en los órganos de control estatal. Las emergencias cotidianas de formas de violencia que develan la liberación de cargas psicopáticas de los victimarios ante personas inermes, posiblemente por prácticas de barbarie traídas de años de conflicto armado. Una de las grandes tragedias como país, es la violencia que ha prevalecido por décadas y que se agudizó en el desarrollo de la pandemia como el caso aberrante y documentado de brutalidad policial del estudiante de derecho Javier Humberto Ordoñez Bermúdez el 09 de septiembre de 2020 en la ciudad de Bogotá, lo que desencadenó una serie de disturbios que no se veían desde 1948 cuando asesinaron al líder político Jorge Eliécer Gaitán.

Lo triste fue que la policía nacional disparó de forma indiscriminada en el afán de “mantener el orden ciudadano”, haciendo que el número de víctimas mortales aumentara asombrosamente. Dentro del marco del Estallido Social, se vivió un desbordamiento enfermizo de prácticas violentas, sobre todo en la represión estatal a los manifestantes, donde los jóvenes protestantes eran acibillados por sicarios o en el mejor de los casos mutilados, como el caso del joven Lucas Villa quien recibió 8 disparos, el 11 de mayo del 2021 en la ciudad de Pereira. O el caso de la menor Alison Meléndez quien se suicida después de ser detenida por la policía en la ciudad de Popayán, dejando una nota aterradora donde denunciaba abuso sexual por parte de los agentes del Estado, caso que está documentado con el video del arresto.

Un asunto extremadamente problemático que se deriva de estas situaciones de violencia extrema, es el grado de indolencia que demostraron sectores sociales de estratificación socioeconómica 5 y 6 –alta- llegando incluso a formar escuadrones de paramilitares que rondaban los conjuntos residenciales a manera de vigilancia armada y disparaban a los manifestantes en compañía de efectivos de la policía nacional (Radio Nacional de Colombia, 2022), como pasó en la ciudad de Cali, cuando la Minga Indígena llegaba del departamento del Cauca. Junto con el solapamiento y connivencia para el ocultamiento o poco tratamiento de información de interés nacional de los medios de comunicación masivos.

El sexto acontecimiento va directo a señalar el asesinato de líderes sociales, excombatientes firmantes del acuerdo de paz y feminicidios. Quizás los hechos más aterradores en la lógica del conflicto armado de nuestra historia como república se dan en el marco de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y son los crímenes de Estado que cometieron los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia –FAC, a personas civiles indefensas, en su mayoría jóvenes cesantes quienes fueron engañados con la promesa de trabajo, pero que luego fueron asesinados a sangre fría y presentados ante la opinión pública como bajas de la guerrillas acaecidas en combates. Se estima que fueron 6,402 personas, quizás más, pues la historia de los desaparecidos no termina.

Este hecho aterrador se ha quedado en la memoria del mundo entero e

hizo que la confianza en las Fuerzas Armadas de Colombia desapareciera por completo, pues durante años el gobierno se empeñó en ocultar la información y en desmentir dichos sucesos. Aunque las historias de esa tragedia fueron reconocidas en el acuerdo de Paz firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. Hoy día sigue sin darse muchas respuestas a las familias víctimas del conflicto. Este asunto no es menor, porque en el marco del Estallido Social, la pregunta ¿quién dio la orden? Se convirtió en un referente de memoria a través de la imagen que crearon artistas del grafiti (Agencia EFE, 2021). En otros panoramas vergonzosos como los líderes comunales y defensores de Derechos Humanos asesinados solo en del 2022, se pueden contabilizar 86 víctimas, Firmantes del acuerdo de Paz asesinados en ese año se pueden contabilizar 21 víctimas (Indepaz, 2021) y feminicidios, hasta abril del 2022 se identificaron 222 feminicidios en Colombia (Observatorio Colombiano de Feminicidios, s/f).

Todo lo anterior motivó el desencanto social por la forma de gobierno que se tornaba indolente ante tal realidad, por ende, a la movilización nacional. El sentimiento de indignación nacional quedó expuesto en las calles de las grandes ciudades y como nunca se había registrado, en pequeñas poblaciones de casi todo el territorio colombiano a través de movimientos de persistencia juveniles, que no dudaron en enfrentarse a los Escuadrones Móviles Antidisturbios ESMAD, y como se dijo anteriormente, las juventudes en todas sus manifestaciones y rangos salieron a las calles en marchas y movimientos de protesta multitudinarias, a estas iniciativas se sumaron gremios de maestros y trabajadores sindicalizados, también sectores de la economía como transportadores y por supuesto etnias indígenas y raizales.

El descontento era generalizado. Las arengas, los cerramientos, las tomas, luego la destrucción del mobiliario urbanístico y monumentaria histórica públicos de vías y parques en las ciudades, al igual que las manifestaciones artísticas en redes sociales y muros de la ciudad a través del grafiti, fueron la expresión constante de una ciudadanía juvenil creciente que estuvo dispuesta a entregar sus vidas por dicha causa. Aunque frente a la manifestación artística y política del grafiti, surgieron grupos

de ciudadanos autollamados a defender el paisajismo y embellecimiento de las ciudades, los cuales consideraban ofensivos los mensajes que intentaban transmitir los muros, dándose a la tarea de borrar con pintura blanca los grafitis que pintaban los jóvenes, sobre todo en los barrios de estratificación socioeconómica alta.

Estas actividades no eran del todo pacíficas o civilistas, pues a los grafiteros los insultaban e intentaban golpear y muchos fueron amenazados de muerte, por los escuadrones urbanos paramilitares. Un caso bien documentado se dio en la ciudad de Medellín, específicamente en los bajos del puente de la avenida 80 con la calle San Juan, donde un colectivo juvenil llamado Fuerza Grafiti, pintó un mural alusivo a los crímenes de Estado haciendo la pregunta ¿Quién dio la orden? y Estado Asesino. Esos grafitis fueron censurados por el ejército en una madrugada del 08 de mayo de 2021, donde militares lo repintaron de color gris (Guarnizo, 2021). Otra particularidad frente al tema de los grafitis está dada en que la censura impuesta sobre esas formas de expresión no era exclusivamente por parte del Estado o las agrupaciones de civiles ofendidas por la fealdad de la ciudad, también las barras bravas del fútbol local hicieron palimpsestos sobre los mensajes políticos de los grupos juveniles y estos eran alusivos al fútbol, hay indicios que dichas actividades de censura estaban patrocinadas por la Alcaldía de la ciudad en cabeza de Daniel Quintero Calle.

Como respuesta al “Estallido Social” el gobierno de Iván Duque Márquez dispuso de todo el aparato del Estado para contener el movimiento social creciente, acciones de contención, que rayaban en la violación de derechos fundamentales y la fuerza desmedida ante los derechos civiles.

¡En Colombia hay mucha gente entrenada para matar!

Desde comienzos de la década de los 90, las Fuerzas Armadas de Colombia (FAC) se vieron en la obligación constitucional de profesionalizarse y así entrar en un modelo de modernización del Estado; usando tratados de cooperación internacional, las FAC comenzaron procesos de cierta formalización profesional bajo el escrutinio de organismos internacionales, tanto en la incorporación de nuevas tecnologías y entrenamientos

anticrimen, como en la formación académica de soldados, policías y agentes del Estado para preservar y proteger los Derechos Humanos de los ciudadanos.

Los desafíos que presentaba la criminalidad en Colombia para los años 90's se daban en dos grandes frentes primordialmente, el primero, en la lucha contra la insurgencia o las guerrillas, dicho de otra manera, la lucha frontal contra la amenaza comunista y; el segundo, haciendo frente a nuevas formas de organizaciones para la criminalidad asociadas a la práctica del narcotráfico constituidas en cárteles o mafias, procesos criminales derivados del periodo del contrabando de mercancías en las fronteras y sumado al fenómeno evidenciado desde los años 70's que se conoce como "la bonanza marimbera" que era el cultivo y tráfico de marihuana en el norte del país. Cabe resaltar que para el momento histórico del que se hace referencia, los grupos de lucha contrainsurgente/paramilitar estaban en ciernes como movimiento de control militar y social. Su accionar estaba justificado ante el Estado bajo la figura de auto-defensas con una presencia que se fortalecía en regiones como Urabá antioqueño y la región del Magdalena Medio. Los alcances de los grupos de autodefensas eran embrionarios para el momento histórico, pero protagónicos en el reclutamiento de combatientes poco tiempo después, por un proceso legitimario Socio-Estatal creciente en poblaciones enteras, basado en el terror y el miedo.

Los desafíos en materia de seguridad nacional hacían que dichas fuerzas del Estado se robustecieran presupuestalmente destacando el número miembros activos y la capacidad técnica de acción bélica, creando una fuerza pública "de admirar" cuando se hacían comparativos con otras fuerzas armadas de países de la región, al menos así lo promocionaban -aún en nuestros días- los medios de comunicación oficiales. Estos procesos de tecnificación y cobertura de las fuerzas armadas colombianas, sumados a otras estrategias comunicacionales publicitarias y de marketing, forjaron un imaginario en los jóvenes de las poblaciones más vulnerables, que mostraba la carrera militar como un estilo de vida lleno de reconocimiento social y aventuras temerarias – muy al estilo película de Hollywood – y del cual, se podría salir de las condiciones de pobreza.

Como contraste, nunca se hablaba de los horrores causados en los

combates: mutilaciones, pérdida de sentidos como el auditivo o estrés postraumático, aparte de las exclusiones sociales y económicas que tienen la mayoría de los soldados al regresar a sus entornos familiares. Con todo lo anterior son numerosos los jóvenes que siguen viendo en la milicia un proyecto de vida y son numerosas las reservas que tienen las Fuerzas Armadas legales en Colombia.

Sin embargo, todo este aparato bélico para “la seguridad ciudadana y nacional” es difícil de sostener y controlar en el compromiso de cumplir con normas constitucionales y convenios internacionales, generando un sistema interno de control disciplinario implacable. Por esta razón, la justicia militar sanciona y destituye a miembros de las Fuerzas Armadas con frecuencia, dejando cesantes a muchas personas que tienen entrenamiento militar de alto nivel. Decenas de soldados y policías profesionales son destituidos en todo momento y esto genera una especie de ventaja comparativa para las organizaciones ilegales, en la posibilidad de engrosar las filas de la criminalidad al integrar a estas personas, pues ofrecen “empleos” con estímulos económicos incluso superiores a los que se tiene en la legalidad. Por tal razón las organizaciones criminales cuentan con personal exmilitar altamente capacitado para sus fines y propósitos.

En esa misma lógica, también es conocido el fenómeno internacional de los servicios de mercenarios que ofrecen algunas organizaciones de exmilitares colombianos para el préstamo de servicios de seguridad y misiones clandestinas en regiones como: Asia, África y Medio Oriente. También está bien documentado el caso de Haití donde un escuadrón de exmilitares colombianos altamente especializado fue capturado en su función de mercenarios, quienes fueron contratados bajo la promesa de pagos en dólares por asesinar al presidente de dicha nación caribeña (Noticias Caracol, 2021).

Bandas criminales y grupos delincuenciales urbanos

La enorme productividad de capital simbólico y económico de la ilegalidad en Colombia hizo que muchas personas eligieran este camino como proyecto de vida. Son innumerables las prácticas de transgresión de las

leyes que se presentan en el país, tantas que lograron permear las culturas populares de las diferentes regiones estableciéndose como cotidiano y aceptado en sentido público, lo que ha implicado dramas terribles en las sociabilidades, pues los alcances ilegales pronto se tornaron en asuntos criminales, con una característica en particular: la violencia.

En este contexto, son indeterminados los grupos criminales que se despliegan en todo Colombia, solo para el caso de la ciudad de Medellín se reconocen en el 2022, al menos 73 grupos delincuenciales comunes organizados – GDCO y otros 5 grupos delincuenciales organizados -GDO, según un informe de la Secretaría de Seguridad. Al mismo tiempo, sumado a la organización para el crimen, están los enormes caudales de dinero que también permean las actividades económicas ordinarias del país con el lavado de activos en la creación de empresas constituidas legalmente o bajo la figura de inversionistas de capital en proyectos de bienes raíces o constructoras, logrando alcances inclusive en la política con el financiamiento de campañas en cargos públicos.

Toda estructura delincencial también tiene sistemas de seguridad que le permiten sostenerse y ser competitivos frente a otras en la carrera criminal lo que implica una fuerza armada de personal dispuesto a generar violencia en a través del sicariato, con cientos de jóvenes seducidos entre otras por las armas, el dinero y el reconocimiento social que implica ser delincuente, otros tantos por factores conexos a eventos violentos como venganzas o legados familiares, incluso como imitación de grupo. Muchos de esos muchachos son reservistas de las fuerzas armadas de Colombia que luego de salir del servicio militar quedan desempleados o como se señaló anteriormente, exmilitares y ex policías que fueron retirados de la institución y que hallaron un lugar en las filas delincuenciales precisamente por su capacidad técnica o entrenamiento militar. La realidad es que gran parte de esos muchachos son reclutados por la fuerza. Hay reportes de casos de desplazamiento forzado intraurbano, precisamente porque algunos jóvenes prefieren huir de sus casas con sus familias, antes de pertenecer a una banda criminal. Ha llegado a tal punto la delincuencia en Colombia que funciona como empresas criminales de la más alta productividad, en donde hay roles específicos de mando u ocupación, horarios de trabajo, responsabilidades territoriales, desde

asesorías profesionales en contabilidad, aspectos jurídicos y financieros con prestaciones sociales y seguros, ahorros o bonos familiares.

La sumatoria de todo lo anterior les permitió a muchos hogares sobrellevar la pandemia, aun con las medidas del confinamiento, pudiendo suspender actividades o relentizarlas. Como expresión del fenómeno, las dinámicas de terror que cada día producían los grupos armados ilegales urbanos, trajo consigo una serie de situaciones problemáticas que se sobredimensionaron en un conflicto interno de proporciones cercanas a la idea de una guerra. Pues la seducción al mundo de las armas, el dinero y la confrontación también la producían organizaciones crecientes al margen de la ley a través de adaptaciones ingeniosas en figuras como el capo o el señor. Esta práctica pareciera perpetuarse en las ciudades del país.

Guerrillas, grupos paramilitares y bandas ilegales rurales

El reclutamiento forzado e histórico de jóvenes campesinos por parte las guerrillas primordialmente, aun siendo un crimen de guerra, sigue reproduciéndose en las regiones más apartadas del país. Lo mismo que la vinculación de jóvenes rurales y urbanos desempleados que quisieron hacer parte de una nómina en el paramilitarismo o las bandas criminales y el servicio militar obligatorio. Son las canteras con lo que sueñan los señores de la guerra en Colombia.

Este tipo de personas que son o tienen cargos públicos, políticos y empresas agremiadas privadas o de interés, que llenan sus bolsillos de dinero con la muerte de jóvenes arriesgados y engañados con cuentos traídos desde los nacionalismos, las religiones, las ideas de revoluciones armadas, el prestigio y los heroísmos patrióticos, construyen la figura de un enemigo público o un hombre exitoso que pone en peligro a eso que llaman nación, los bienes privados o la democracia. Hay que recalcar y como se dijo anteriormente -para ponerlos de nuevo en evidencia- con el enclave de los medios de comunicación masivos, llegando al punto de hacer novelas y películas que cuentan una y otra vez, el lado humano de los delincuentes, este asunto no es algo menor. Las grandes o más exitosas producciones del cine y la televisión colombiana, por ejemplo, son películas

o series que abordan la guerra o la violencia, no desde el primer plano a debatir como tragedia, sino como algo naturalizado que se muestra solo en la representación de un marco o un paisaje contextual y el drama está en los ideales románticos del amor o el desamor. Imaginarios movidos también desde la música popular y trivializada desde los humoristas.

Lo anterior no es una posición moralizante o un prejuicio en términos de valor, simplemente son las conjeturas de años de relacionamiento dialógico con la juventud y de estudiar las producciones de la cultura. En términos generales, las principales víctimas de la guerra son los jóvenes campesinos, quienes, en las áreas rurales de la Colombia Profunda, no les queda opción de decir que no ante el reclutamiento forzado, porque sin duda alguna tendrían repercusiones que comprometerían la vida. De esta situación, no se escapan las personas migrantes, son cientos de muchachos en situación de tránsito que son vinculados a la criminalidad y son instrumentalizados para fines de terceros.

Las canteras de la guerra, forjando un habitus

Dada la enorme extensión territorial de Colombia, la presencia de los servicios del Estado en las poblaciones alejadas siempre ha sido un reto para los gobiernos, pues el Estado no cuenta con la suficiente dimensión escalar institucional para llegar con la oferta de servicios gubernamentales a lo que se conoce como la Colombia Profunda (Comisión de la verdad). La realidad y por la lógica de la guerra interna que se libra en el país durante décadas, es que la mayor presencia de los gobiernos en los territorios apartados de la nación está dada a través de los servicios de “seguridad y defensa” representados en bases militares, escuadrones móviles, cantones y estaciones del ejército, la armada y policía nacional y aun así, no se logra cubrir todo el territorio del país. Es de anotar que dichos servicios también son implantados a la fuerza en algunas poblaciones y con un sentido histórico donde hay vacíos institucionales por grupos al margen de la ley – guerrillas, paramilitares, bandas criminales- que lograron establecerse como fuerza paralela al Estado y legitimadas a través del miedo. Son grupos ilegales paraestatales que monopolizan las sociabilidades de localidades enteras, imponiendo -servicios de justicia y autoridad-.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Colombia - FAC – en principio con un propósito de legitimación o visión-misión institucional y luego como ente articulador de las demás ofertas de servicios estatales, han llevado a la Colombia Profunda programas de cuidado primarios en proyectos de atención médicos y sociales. Con especialistas, nutricionistas, psicológicos, programas odontológicos, acontecimientos deportivos, de esparcimiento cultural y actividades recreativas. Pero siempre con la notoriedad de varios detalles que no se pueden pasar por alto: 1) La presencia de los miembros, medios técnicos, distintivos y símbolos representativos de las FAC; 2) una limitación temporal en la implementación de dichas actividades –máximo unas semanas en el territorio intervenido-. Lo que implica considerar diversos factores conexos y fundamentales para la creación de un imaginario militarista muy engañoso en los hábitos de generaciones de niños y jóvenes que fueron beneficiarios de los programas en dichas poblaciones. Pues los únicos referentes que van a encontrar en la idea de servicio social o a la nación, se van a asociar directamente por quien estableció el programa -por todo el capital simbólico desplegado- para el caso, las Fuerzas Armadas de Colombia y no por otro tipo de representatividad institucional como colegios, escuelas, maestros, científicos, bibliotecas o centros de salud. Esta estrategia de legitimación militarista intencionada juega en lo profundo de la memoria como la construcción de un hábitus y se refuerza con unas pericias comunicacionales muy específicas, frecuencias excesivas de imágenes y discursos publicitarios en medios masivos, donde se exalta la figura del héroe de la patria.

En este sentido, cuando las generaciones de niños y jóvenes crecen y éstos deseen ayudar a sus familias, comunidades y en términos generales, piensen en el aporte a la idea de nación misma, en el ensueño del desarrollo, los jóvenes querrán hacer parte del referente que conocieron, vieron y que les ayudó en algún momento de la vida, enrolándose voluntariamente en el ejército como forma de agradecimiento. Esto no quiere decir que los jóvenes hayan visto necesariamente personal civil armado o soldados armados protegiendo los entornos donde se desarrollan las ofertas de atención social y hayan quedado seducidos por las armas, es muy probable que los jóvenes hayan visto médicos, psicólogos, nutricionistas, veterinarios o deportistas y por lo tanto, quieran ser como ellos.

Aunque pareciera obvio, lo que no saben esos jóvenes soñadores, es que para ser todo aquello que vieron, soñaron y quieren imitar, es necesario antes haber pasado por un proceso formativo académico intenso en profesionalización, no necesariamente a través del régimen militar. Quedando atrapados en las filas de soldados rasos que sirven como carne de cañón ante las confrontaciones de la guerra (Semana, 2022).

La suma de todos los miedos

No es posible escribir sobre Colombia con algún entusiasmo que hable de un futuro promisorio como predicción para sus generaciones venideras o sentir algún orgullo nacional cuando se conoce que, en el país, durante la pandemia, en 2020, se cometieron 91 masacres donde murieron 381 personas asesinadas. Para el 2021 se cometieron 96 masacres donde murieron 338 personas asesinadas. Y en 2022 44 masacres con 158 personas asesinadas. Es decir, en el marco de la pandemia hubo 231 masacres, donde fueron asesinadas violentamente 877 personas (Indepaz, 2021). Son cifras escalofriantes porque son jóvenes, mujeres, niños, adultos, ancianos a los que se les cortaron de forma violenta sus ilusiones, sus deseos, sus anhelos, sus recuerdos, sus memorias, sus amores, sus vidas y por eso es por lo que se repiten tanto en el texto las palabras, tragedias, terror, dramas. Quizás en este texto solo aparezca un par de veces la palabra vergüenza, ésta es la segunda, en la presente reflexión.

Pero no se concluye este trabajo como una derrota total, NO – en mayúscula. Pues es muy común encontrar en Colombia a personas que trabajan incansablemente con convicción y entrega desinteresada para lograr tranquilidades óptimas y desde diferentes espacios, lugares, organismos e instituciones, incluso en entidades estatales de seguridad –militares, policiales, políticas- son voluntades que se mantienen y persisten para que algún día cambie el panorama sombrío que se cierne sobre Colombia. Aún nos queda camino por recorrer y reconciliar, es seguro que no será fácil. Pues el mundo apenas despierta del sueño pandémico y no se nota que vayamos a estar mejor.

Este escrito es sobre Colombia, porque allí aún se puede soñar.

Conclusión

El análisis desarrollado en este capítulo permite comprender que la pandemia por COVID-19 en Colombia no constituyó únicamente una crisis sanitaria, sino un catalizador que profundizó problemáticas estructurales históricamente invisibilizadas. Las interacciones entre precariedad, desigualdad y violencia revelaron un entramado social complejo, en el que confluyen factores económicos, políticos, culturales y territoriales que condicionan de forma directa la vida de millones de personas. La emergencia sanitaria expuso las debilidades del Estado para garantizar derechos fundamentales, evidenciando la insuficiencia de las políticas públicas frente a las demandas sociales y la persistente exclusión de amplios sectores poblacionales.

El impacto del confinamiento, la fragilidad del sistema productivo, la informalidad laboral y el debilitamiento de las redes comunitarias incrementaron las brechas socioeconómicas y configuraron un escenario propicio para el estallido social de 2021. Las movilizaciones masivas, lideradas principalmente por jóvenes, campesinos, indígenas y comunidades históricamente marginadas, constituyeron una respuesta colectiva frente a la acumulación de deudas sociales, la falta de oportunidades y la violencia ejercida tanto por actores estatales como paraestatales. Este fenómeno evidenció que, en contextos de crisis, la sociedad civil puede articular nuevas formas de resistencia y organización, resignificando la participación política y la búsqueda de justicia social.

Asimismo, el capítulo muestra que la violencia en Colombia no puede entenderse de manera fragmentada, sino como un fenómeno sistémico que se reproduce en múltiples escalas: desde el conflicto armado rural y urbano, hasta las dinámicas criminales, la represión institucional y la instrumentalización mediática. En este sentido, la pandemia operó como un prisma que amplificó tensiones históricas, visibilizando las desigualdades estructurales y la necesidad urgente de replantear los modelos de gobernanza, desarrollo y seguridad.

Finalmente, este análisis invita a reflexionar sobre los retos que enfrenta el país para construir un proyecto social más inclusivo y sostenible. Superar la precariedad y reducir las violencias requiere no solo de políticas públicas integrales, sino también de un compromiso ético y colectivo

orientado a fortalecer la cohesión social, garantizar la equidad y proteger los derechos humanos. Aunque el panorama descrito es sumamente complejo, también se evidencia que, en medio de la adversidad, emergen prácticas solidarias, resistencias creativas y procesos comunitarios que abren la posibilidad de imaginar un futuro distinto para Colombia, porque allí, aún se puede soñar.

Referencias

- Alcaldía de Medellín. (2022, 13 de mayo). Con nuevo inventario criminal se refuerza la estrategia contra el crimen organizado en Medellín. <https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/12346-Con-nuevo-inventario-criminal-se-refuerza-la-Estrategia-contra-el-Crimen-Organizado-en-Medellin>
- Bohórquez, E. (2021, 9 de septiembre). La historia del escándalo del Mintic, Karen Abudinen y Centros Poblados. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/economia/la-historia-del-escandalo-del-mintic-centros-poblados-y-karen-abudinen/>
- Comisión de la Verdad. (2021, 20 de octubre). Lanzamiento de la ‘Cátedra Alfredo Molano Bravo: voces y verdades de la Colombia profunda’. <https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/lanzamiento-de-la-catedra-alfredo-molano-bravo-voces-y-verdades-de-la-colombia-profunda>
- Economía Naranja. (s. f.). Economía Naranja. Recuperado el 6 de septiembre de 2025, de <https://economianaranja.gov.co/>
- El Colombiano. (2018, 10 de septiembre). Así se endeudaron los municipios con los bonos del agua. <https://www.elcolombiano.com/colombia/bonos-de-agua-del-ministro-carrasquilla-municipios-y-departamentos-KY9302738>
- El Espectador. (2021). Vuelve y juega: mural “¿quién dio la orden?”, sobre falsos positivos, fue vandalizado. <https://www.elespectador.com/judicial/vuelve-y-juega-mural-quien-dio-la-orden-sobre-falsos-positivos-fue-vandalizado-article/>
- El Espectador. (2022, 14 de junio). Andrés Escobar y 12 policías están formalmente investigados por la Fiscalía. <https://www.elespectador.com>

- com/judicial/andres-escobar-y-12-policias-estan-formalmente-investigados-por-la-fiscalia/
- El Tiempo. (2017, 28 de abril). Escándalos de corrupción que más han indignado a los colombianos. <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/casos-de-corrupcion-mas-sonados-en-colombia-82678>
- El Tiempo. (2022, 9 de junio). César Melgarejo cuenta cómo tomó la foto ganadora. <https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/cesar-melgarejo-cuenta-como-tomo-la-foto-ganadora-del-rey-de-espana-655566>
- Guarnizo, J. [@JoseGuarnizo]. (2021, 8 de mayo). “Esta madrugada, el @COL_EJERCITO puso a soldados a borrar grafitis” [Tweet]. Twitter. <https://twitter.com/i/status/1391084075063066643>
- INDEPAZ. (2022). Líderes sociales, defensores de DD. HH. y firmantes de acuerdo asesinados en 2022. <https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/>
- INDEPAZ. (2021a). Informe de masacres en Colombia durante el 2020-2021. <https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/>
- INDEPAZ. (2021b, 21 de julio). Listado de las 80 víctimas de violencia homicida en el marco del paro nacional al 23 de julio. <https://indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/>
- Noticias Caracol. (2021, 18 de agosto). Exclusivo Noticias Caracol: Mercenarios colombianos confesaron cómo mataron al presidente de Haití [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=atcUVX0y8EQ>
- Observatorio Colombiano de Femicidios. (s. f.). Observatorio Colombiano de Femicidios. Recuperado el 6 de septiembre de 2025, de <https://observatoriofemicidioscolombia.org/>
- Radio Nacional de Colombia. (2022, 14 de junio). Imputan cargos a Andrés Escobar por disparar contra civiles en Cali. <https://www.radionacional.co/actualidad/judicial/andres-escobar-fue-imputado-por-disparar-contra-civiles-en-cali#:~:text=de%20Ciudad%20Jard%C3%ADn.,Andr%C3%A9s%20Escobar%20fue%20captado%20en%20c%C3%A1mara%20el%20pasado%2028%20de,el%20Gobierno%20Nacional%20al%20pa%C3%ADs>
- S TV Noticias. (2021, 16 de abril). Entrevista al Ministro de Hacienda sobre la reforma tributaria [Video]. Semana. <https://d3t4ljno2iplv5>

cloudfront.net/wp-semana/20210416/607a1fbb52faff000178a284/t_0a-08f94ea06e4bd1a01aafd4e9dc4b8b_name_Entrevista_Min_Hacienda/file_1280x720-2000-v3_1.mp4

Semana. (2022, 20 de abril). Lo último: Se eleva a seis el número de soldados asesinados tras emboscada en Antioquía. <https://www.semana.com/nacion/articulo/lo-ultimo-a-seis-se-eleva-el-numero-de-soldados-asesinados-tras-emboscada-en-antioquia/202200/>

Tendencias El Tiempo. (2021, 7 de septiembre). Así están estafando a mujeres y estudiantes con Ingreso Solidario. <https://www.eltiempo.com/cultura/gente/ingreso-solidario-conozca-la-estafa-digital-con-el-subsidio-de-septiembre-616329>

Torrado, S. (2020, 20 de septiembre). El préstamo del gobierno colombiano a Avianca se empantana en los tribunales. El País. <https://el-pais.com/economia/2020-09-21/el-prestamo-del-gobierno-colombiano-a-avianca-se-empantana-en-los-tribunales.html>

Transparencia por Colombia. (2020). Así se mueve la corrupción: Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia: 2016-2020. <https://transparenciacolombia.org.co/especial-radiografia-de-hechos-de-corrupcion-2016-2020/>

Velázquez Loaiza, M. (2021, 5 de julio). ¿Qué es la primera línea de las protestas en Colombia y qué es lo que piden? CNN en Español. <https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/05/que-es-la-primera-linea-de-las-protestas-en-colombia-y-que-es-lo-que-piden/>

